



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe viene a introducir determinadas modificaciones en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, siendo preciso tener en consideración que el mencionado texto fue objeto de informe en fase de Proyecto, emitido el 23 de julio de 2007.

Como ya se indicó en el mencionado informe son tres las previsiones del texto actualmente vigente que inciden en materia competencia de esta Agencia: el deber de confidencialidad de los miembros de las comisiones de colaboración al que se refiere el artículo 8.1; el contenido de los currículos de los miembros de las citadas comisiones, regulado por el artículo 9 y el Anexo del Real Decreto y la implantación por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de medidas que permitan la adecuada aplicación de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, actualmente incluida en el artículo 14, párrafo segundo del texto.

El Proyecto ahora sometido a informe se refiere únicamente a la primera y a la tercera de las cuestiones mencionadas, no estableciendo modificación alguna del régimen contenido en el artículo 9.

De este modo, y sin perjuicio de la modificación de la estructura del artículo 8 del Real Decreto, el párrafo segundo de su apartado 1, en la redacción dada por el Proyecto mantiene el “deber de respeto de la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes a la acreditación de los que hubieran tenido conocimiento por razón de su participación en la Comisión”.

En cuanto a las medidas encaminadas a garantizar la aplicabilidad de la Ley 11/2007, actualmente contenidas en el artículo 14, párrafo segundo, el Proyecto no las incorpora al texto resultante de la reforma, si bien se refiere a estas obligaciones exigibles a la ANECA en su disposición adicional segunda, y en particular en el apartado 3 cuando establece que “La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación posibilitará la presentación de las



solicitudes, la consulta del estado de tramitación del expediente y su resolución mediante el uso de procedimientos por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, implantando sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal”.

Pues bien, en el informe de 23 de junio de 20017 esta Agencia ya informó favorablemente a la referencia del deber de confidencialidad, como manifestación del deber de secreto establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, en los términos en que el mismo se mantiene en el texto ahora informado, por lo que no cabe efectuar comentario adicional alguno a lo que ya se indicaba en dicho informe.

En cuanto a las obligaciones relacionadas con la implantación de la Ley 11/2007, el tan citado informe señalaba lo siguiente:

*“(...) el artículo 14 del Proyecto se refiere al procedimiento, especificando su apartado 2 que “la ANECA posibilitará la presentación de las solicitudes, la consulta del estado de tramitación del expediente y su resolución mediante el uso de procedimientos telemáticos y firma electrónica, en aplicación de las normas que regulan dichos procedimientos”.*

*Ello supone que, con carácter general, resulte de aplicación al procedimiento lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuyo artículo 6.1 dispone que “Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos”.*

*Asimismo, el artículo 6.2 enumera los derechos de los ciudadanos en relación con la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, entre los que se encuentra, según la letra i) del precepto, el derecho a “la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas”.*

*En todo caso, el artículo 13.2 enumera los sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas,*



*Por último, debe recordarse que, conforme al artículo 37.1, “En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados”, añadiendo el artículo 37.1 que “En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable”.*

*La garantía del adecuado funcionamiento del sistema se fundará en la necesaria implantación de las medidas de seguridad que garanticen la integridad y veracidad de la información frente a su pérdida, destrucción o acceso no autorizado, tal y como dispone el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 15/1999.*

*Por este motivo, resultaría necesaria la expresa referencia a la necesaria implantación de las citadas medidas, contenidas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, en el texto del artículo 14.2 del Proyecto sometido a informe.*

*Por ello, se propone la siguiente redacción del citado apartado:*

*“La ANECA posibilitará la presentación de las solicitudes, la consulta del estado de tramitación del expediente y su resolución mediante el uso de procedimientos telemáticos y firma electrónica, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 11/2007, 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, implantando sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.”*

Como puede comprobarse, dicho texto fue el finalmente incorporado al párrafo segundo del artículo 14 del Real Decreto objeto de reforma y se identifica igualmente con el apartado 3 de la disposición adicional segunda del Proyecto objeto del presente informe. De este modo, tampoco procedería la emisión de observación alguna en lo referido al contenido sustantivo de la norma.



La única cuestión que pudiera plantear alguna duda es la ubicación sistemática de dicha previsión, toda vez que al incluirse en una disposición adicional del Proyecto y no en su articulado, excluye la referencia a las garantías de seguridad en el procedimiento de acreditación del contenido de la norma objeto de reforma para simplemente complementarla a través del Real Decreto por el que dicha modificación se lleva a cabo.

En este sentido, cabría plantearse si no sería preferible que, toda vez que lo establecido en la disposición adicional segunda se refiere a la propia tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1312/2007, dicho precepto fuera incluido en el citado texto legal, apareciendo como un apartado del artículo único del Proyecto y no como disposición adicional del mismo.